



REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, Veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVEZ BRAVO

MEDIO DE CONTROL	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2021-00696-00
DEMANDANTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP Correo: notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co Apoderado EDINSON TOBAR VALLEJO Correo: etobar@ugpp.gov.co edinsontobar@hotmail.com comdejuridicasas@gmail.com
DEMANDADA:	BLANCA INÉS FLOREZ GOMEZ Correo: binezflorez@gmail.com
ASUNTO	NIEGA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

Puesto a disposición del despacho el presente asunto el 7 de septiembre de 2022 se dispone:

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede el Despacho a resolver la solicitud de medida cautelar formulada por la parte demandante, con la que pretende suspender provisionalmente los efectos de la Resolución RDP 035641 de 26 de noviembre de 2019, por medio de la cual la UGPP reconoció una pensión de sobrevivientes a favor de la señora Blanca Inés Flórez Gómez.

II. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR

La parte actora, solicita que se declare la nulidad de la Resolución RDP 035641 de 26 de noviembre de 2019, mediante el cual se reconoció y ordeno el pago de una pensión de sobrevivientes en favor de la señora Blanca Inés Flores Gómez en calidad de cónyuge del causante, señor Eduardo Enrique Gómez García, tras considerar que no le asiste derecho, puesto que no cumple con los requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003 dado que no acreditó los requisitos de convivencia requeridos para el efecto.

Dijo que mediante Resolución No. 3786 de 21 de septiembre de 1990, la Seccional Valle del Cauca I.S.S., en calidad de Patrono reconoció una pensión de jubilación con expectativa a compartir a favor del señor Gómez García, en cuantía de equivalente a \$ 442.403, a partir del 11 de julio de 1990, prestación equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el último año de servicio, 11 julio de 1989 – 10 julio de 1990, de conformidad a lo señalado en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 y en artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.



Que posteriormente y mediante Resolución No. 002586 de 28 de marzo de 1995 el ISS en calidad de Asegurador reconoció una pensión de vejez al señor Eduardo Enrique Gómez García, en cuantía de \$411.494, a partir del 24 de junio de 1993, prestación que se liquidó aplicando una tasa de reemplazo del 69% del promedio de lo devengado en las últimas 1000 semanas de conformidad a lo señalado en el Decreto 758 de 1990 y reconociendo un retroactivo a favor del Instituto del Seguro Social ISS en calidad de Patrono en cuantía de \$12.412.955.

Expreso que el fallecimiento del señor Eduardo Enrique Gómez García tuvo lugar el día 31 de agosto de 2019, según Registro Civil de Defunción aporta con la demanda.

Manifestó que con ocasión del fallecimiento del se presentó a reclamar la pensión de sobrevivientes la aquí demandada, en calidad de cónyuge, solicitud despachada favorablemente a través de la Resolución RDP 035641 de 26 de noviembre de 2019, reconociendo dicha prestación a partir del 01 de septiembre de 2019, día siguiente al fallecimiento del causante, en las mismas cuantías devengadas en porcentaje del 100%.

Refirió que pese a lo anterior, a través de Informe Técnico de Investigación Administrativa No. 218691 de 10 de diciembre de 2019, *respecto de la convivencia entre causante y solicitante se concluyó que “de acuerdo con la información verificada, entrevistas y trabajo de campo, se logró establecer que la señora Blanca Inés Flórez Gómez (solicitante) y el señor Eduardo Enrique Gómez García (causante) convivieron como pareja desde día 28 enero de 2017 hasta el día 31 agosto de 2019, fecha de fallecimiento del causante. Lo anterior en contradicción con lo manifestado por la solicitante en su declaración extrajuicio, en la que manifestó haber convivido con el causante desde el 15 de febrero de 2012. El resultado de la convivencia no está avalado por cuanto no se pudo verificar con los testimonios de los familiares y vecinos del causante su convivencia en las fechas aludidas anteriormente. Adicionalmente se manifestó por parte de la solicitante algunas inconsistencias con respecto al lugar y tiempo de residencia de la pareja puesto que no se encontraron vecinos que pudieran dar fe de su convivencia y algunos familiares manifestaron no conocer su convivencia antes de la celebración de su matrimonio”*.

Comentó que en atención a lo anterior, a través del Auto No. ADP 000285 de 22 de enero de 2020, la UGPP solicitó a la señora Blanca Inés Flórez Gómez autorización para revocar la Resolución RDP 035641 de 26 de noviembre de 2019 en razón a que el Informe Técnico realizado arrojó inconsistencias en el tiempo de convivencia entre el causante y la beneficiaria toda vez que únicamente convivieron desde el 28 de enero de 2017 fecha del matrimonio con el causante y hasta el fallecimiento del mismo, ocurrido el día 31 de agosto de 2019 y frente a la contingencia de muerte del afiliado, el sistema general de seguridad social reguló la pensión de sobrevivientes y fijó una serie de requisitos para su obtención, para el caso en específico de la señora Blanca Inés Flórez Gómez en calidad de Cónyuge, la normatividad vigente para la fecha en que ocurrió el deceso, es la contenida la Ley 797 de 2003, que exige un mínimo de tiempo de convivencia (5 años), los que no logro acreditar la citada señora, puesto que no fue posible verificar la convivencia aducida desde el 15 de febrero del



RADICACIÓN :2021-00696-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
Demandante : UGPP
Demandado : BLANCA FLOREZ GOMEZ

3

2012, ya que no se encontraron ni familiares, ni vecinos que pudieran dar fe de dicha convivencia.

Señaló que, en este punto, la Ley 797 de 2003 en su artículo 13 ha establecido los requisitos para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes, indicando que:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.”.

Teniendo en cuenta lo indicado en la norma transcrita, se concluye que para tener derecho a la pensión de sobreviviente, el cónyuge o la compañera o compañero permanente debería acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y convivió con él no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte.

Concluyó que a la señora Blanca Inés Flórez Gómez, no le asiste el derecho a que se le reconozca y pague una pensión de sobrevivientes, puesto que no cumple con el requisito esencial de convivencia que la ley establece ya que, teniendo en cuenta los informes realizados no existió una convivencia durante más de cinco años con el causante, como lo manifestó en su declaración juramentada, razones que resultan ser suficientes para decretar la suspensión provisional del acto demandado.

III. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA

De conformidad con la constancia secretarial de fecha 07 de julio de 2022, contenida en el índice 15 del aplicativo informático Samai, la parte demandada no se pronunció con relación a la medida cautelar solicitada.

IV. CONSIDERACIONES

4.1. PROBLEMA JURÍDICO

El asunto que se discute se contrae a establecer si la solicitud de suspensión provisional del acto demandado cumple con los requisitos establecidos en la ley para su procedencia.

4.2. TESIS:

Se negará la medida cautelar solicitada, porque el cotejo de los actos demandados con las normas presuntamente vulneradas no permite evidenciar la presunción de buen derecho en favor de la solicitante sobre la configuración de una trasgresión legal o constitucional en el reconocimiento pensional.

4.3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL

La suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto acusado tiene su



RADICACIÓN :2021-00696-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
Demandante : UGPP
Demandado : BLANCA FLOREZ GOMEZ

4

fundamento constitucional en el artículo 238 de la C.P. y su trámite, procedencia y demás requisitos se desarrolla en los artículos 229 y ss del CPACA.

Entre sus características principales se destaca su naturaleza cautelar, temporal y accesoria, tendiente a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos, mientras se decide de fondo su constitucionalidad o legalidad, en el proceso ordinario en el que se hubiere decretado tal medida. Es por ello que su finalidad está dirigida a “evitar, transitoriamente, que el acto administrativo surta efectos jurídicos, en virtud de un juzgamiento provisorio del mismo, salvaguardando los intereses generales y el Estado de derecho”.

Para la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos el CPACA indicó que debe referirse expresamente a la confrontación de legalidad que debe efectuar el Juez de la medida; es decir, ese análisis inicial de legalidad del acto acusado, de cara a las normas que se estiman infringidas.

El Consejo de Estado – Sección Primera, en providencia del 31 de mayo de 2019, C.P: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS, anteriormente citada, recordó los postulados de la providencia del 13 de mayo de 2015 y señaló que:

“(…) la suspensión provisional, como toda medida cautelar, debe estar siempre debidamente sustentada en los dos pilares fundamentales sobre los cuales se edifica todo sistema cautelar, a saber: los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y la apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga fin al litigio (…)

Tal visión ha sido compartida por la precitada Sección Primera del Consejo de Estado, en el auto del 27 de agosto de 2015, en el cual subrayó lo siguiente:

“(…) En esta providencia no se está adoptando decisión de fondo, pues lo que se resuelve es la solicitud de suspensión provisional, la cual se niega mediante auto interlocutorio, entre otras razones, porque no se configuran los requisitos que la Jurisprudencia y la Doctrina denominan Fumus bonis iuris (aparición de buen derecho) y periculum in mora (necesidad de urgencia de la medida cautelar)”.

Acerca de la forma en la que el Juez debe abordar este análisis inicial, la citada providencia de 17 de marzo de 2015 (Expediente núm. 2014-03799), sostuvo:

*“(…) Para el estudio de la procedencia de esta cautela se requiere una **valoración del acto acusado** que comúnmente se ha llamado **valoración inicial**, y que implica **una confrontación de legalidad de aquél con las normas superiores invocadas, o con las pruebas allegadas junto a la solicitud**. Este análisis inicial permite abordar el objeto del proceso, la discusión de ilegalidad en la que se enfoca la demanda, **pero con base en una aprehensión sumaria, propia de una instancia en la que las partes aún no han ejercido a plenitud su derecho a la defensa**. Y esa valoración inicial o preliminar, como bien lo contempla el inciso 2º del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **no constituye prejuzgamiento**, y es evidente que así lo sea, dado que su resolución parte de un conocimiento sumario y de un estudio que, si bien permite efectuar interpretaciones normativas o valoraciones iniciales, no sujeta la decisión final (…)*” (Resaltado fuera del texto).

Como lo refiere la providencia transcrita, es importante la prevención efectuada por el legislador al advertir que la decisión sobre la medida cautelar, de ningún modo implica prejuzgamiento, teniendo en cuenta que, como lo ha precisado la Jurisprudencia del



RADICACIÓN : 2021-00696-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
Demandante : UGPP
Demandado : BLANCA FLOREZ GOMEZ

5

Consejo de Estado – Sección Primera, se trata de “*mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto*”¹.

4.4. CASO CONCRETO:

En el proceso de la referencia, la parte demandante solicitó la suspensión provisional de la Resolución RDP 035641 de 26 de noviembre de 2019, por medio de la cual la UGPP reconoció una pensión de sobrevivientes a favor de la señora Blanca Inés Flórez Gómez.

Manifestó que la medida acautelar solicitada es procedente porque con la expedición de dicho acto se desconocieron, tras errada información suministrada por la beneficiaria de la misma, los requisitos exigidos por la Ley 797 de 2003, ello por cuanto no se logró acreditar el requisito de la convivencia, mínima de cinco (5) años, previos al fallecimiento del causante, contrariándose así el ordenamiento jurídico, la Constitución Política de Colombia.

Para resolver, en primer término, es menester tener en cuenta que conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley.

Que, a través de la Ley 100 de 1993, el Legislador organizó el sistema de seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.

Fue así como y con el propósito de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador previó las denominadas pensiones de sobrevivientes y sustitución pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación.

La Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, acerca del régimen de pensiones y en especial de la pensión de sobrevivientes, manifestó:

«(...) Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social antes mencionado.

La finalidad esencial de esta prestación social es la protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las personas que dependían

¹ Así lo sostuvo la Sala en la providencia de 11 de marzo de 2014 (Expediente núm. 2013 00503. Consejero ponente: doctor Guillermo Vargas Ayala), al expresar que: “Con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los Jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la Jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del C.P.A.C.A. expresamente dispone que ‘[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento’. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es de brindar a los Jueces ‘la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite’ []. Una suerte de presunción iure et de iure, sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del Juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. // La Jurisprudencia ya ha ido señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al Juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o ‘prejuzgamiento’ de la causa []. La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar, garantizan que el Juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia”. (Negritas fuera del texto).



RADICACIÓN :2021-00696-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
Demandante : UGPP
Demandado : BLANCA FLOREZ GOMEZ

6

económicamente del causante puedan seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. (...)”.

En este punto es relevante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la pensión².

Para ello deben tenerse en cuenta los requisitos que para ser derecho de la misma, determina el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 “*Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones*”, <Modificado por la Ley 797 de 2003, artículo 12. Nuevo texto:>, que determina que tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los siguientes:

1. *Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,*
2. *Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:*

Parágrafo 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley. El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que, a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez”.

En cuanto a los beneficiarios y el monto de esta prestación, en el artículo 47 señalan como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los siguientes:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

- a) *En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;*
- b) *En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).*

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo

² Sentencia T-564 de 2015. Septiembre 3 de 2015. Referencia expediente T-4.919.041. Magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos.



RADICACIÓN :2021-00696-00
Medio de control : NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
Demandante : UGPP
Demandado : BLANCA FLOREZ GOMEZ
de convivencia con el fallecido.

7

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.

Conforme al recuento normativo relacionado en precedencia, resulta claro entonces que, tal y como lo señala la parte demandante, para la procedencia de la pensión de sobrevivientes, se deben cumplir los requisitos que para el efecto estatuye la ley 100 de 1993, *“por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”*, normatividad que determina en su articulado dichos requisitos, contándose dentro de ellos, para el caso de que quien reclame dicha prestación, sea la cónyuge o compañera supérstite, la acreditación de un tiempo mínimo de convivencia con el causante, el que para el asunto sometido a estudio, la solicitud se basa en una investigación al interior del fondo pensional en el cual por medio de confrontación de los hechos se concluye la falta del requisito de convivencia, lo cual requiere de un análisis bajo el principio de contradicción con los demás elementos de prueba que se aporten al proceso, que no resulta ser propio de este estadio procesal, sino del análisis de fondo.

Así las cosas y al no encontrarse configurada a partir de un simple ejercicio de confrontación con las normas superiores que se argumentan como violadas, una situación de manifiesto desconocimiento de las mismas, necesaria para decretar la suspensión provisional solicitada, no se infiere prima facie la violación de las mismas, y, por ende, la apariencia de buen derecho que exige el decreto de una medida cautelar.

Además, suspender los efectos del acto demandado en este momento procesal, sin una presunción de buen derecho, implica desconocer los principios de confianza legítima y buena fe respecto del demandado, pues goza de una pensión hace varios años, como derecho que en su momento reconoció la propia administración, la que además le ha sido reliquidada en varias oportunidades.

En consecuencia, se;

RADICACIÓN
Medio de control
Demandante
Demandado

:2021-00696-00
: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (LESIVIDAD)
: UGPP
: BLANCA FLOREZ GOMEZ



8

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la medida cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en la suspensión provisional del acto administrativo demandado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente providencia conforme a lo dispuesto en el artículo 201 de la ley 1437 del 2011 modificado por el artículo 50 de la Ley 2080 del 2021.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


JHON ERICK CHAVES BRAVO
Magistrado